

REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

AÑO XXXIII — JULIO - SEPTIEMBRE DE 1965 — Nº 133

DIRECTOR: ORLANDO TAPIA SUAREZ

CONSEJO CONSULTIVO:

MANUEL SANHUEZA CRUZ
EMILIO RIOSECO ENRIQUEZ
JUAN BIANCHI BIANCHI
QUINTILIANO MONSALVE JARA
MARIO CERDA MEDINA
LUIS HERRERA REYES

ESCUELA TIPOGRAFICA SALESIANA CONCEPCION — (CHILE)

JURISPRUDENCIA

CORTE SUPREMA

RAUL CORTES DE MONROY BARRIOS

CON IMPUESTOS INTERNOS

RECLAMACION DE IMPUESTO

Recurso de casación en el fondo.

IMPUESTOS — IMPUESTOS DE TIMBRES, ESTAMPILLAS Y PAPEL SELLADO — LEY DE TIMBRES, ESTAMPILLAS Y PAPEL SELLADO — DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 371, DE 3 DE AGOSTO DE 1953 — TRIBUTOS — ACTOS JURIDICOS — COMPRAVENTAS — PERMUTA — DACION EN PAGO — BIENES RAICES — IMPUESTO A LA COMPRAVENTA, PERMUTA Y DACION EN PAGO DE BIENES RAICES — EXPROPIACION — EXPROPIACION DE BIENES RAICES — LEY Nº 7.750, DE 7 DE ENERO DE 1944 — LEY Nº 9.629, DE 18 DE JULIO DE 1950 — EXENCION DE IMPUESTO — RECIBOS DE DINERO — DOCUMENTOS QUE DAN FE DE ACTOS O CONTRATOS NO GRAVADOS EN EL D.F.L. Nº 371 — POTESTAD PUBLICA — DOMINIO — PRIVACION DE DOMINIO — INDEMNIZACION — AUSENCIA DE LUCRO — GRAVAMEN TRIBUTARIO — DECRETO SUPREMO Nº 400, DE 11 DE FEBRERO DE 1943 — IMPUESTOS INTERNOS — CONSIDERANDOS DEL FALLO — RECLAMACION DE IMPUESTO — RECLAMANTE — SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA — CONSIDERANDOS DEL FALLO — SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA — SENTENCIA CONFIRMATORIA — RECURSO DE CASACION — RECURSO DE CASACION EN EL FONDO — FALLO RECURRIDO — ERROR DE DERECHO — ESCRITO DE FORMALIZACION — FORMALIZACION DEL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO — INFRACCION DE LEY — INTERPRETACION DE LA LEY.

DOCTRINA.—El artículo 7º sobre Impuestos de Timbres, del Decreto con Fuerza de Ley Estampillas y Papel Sellado, Nº 371, de 3 de Agosto de 1953, contemplaba —y aún lo hace

la legislación actual sobre la materia— algunos tributos aplicables a ciertos actos jurídicos, en atención al contenido integral de ellos, sustrayéndolos de este modo a la incorporación en otro u otros de los casos de su larga y compleja enumeración, en los cuales pudieran entenderse incluidos si se los discriminara en relación a las partes o elementos de ese mismo contenido general; y así ha ocurrido, entre otros, con el tributo señalado a la compraventa, permuta y dación en pago de bienes raíces, en el Nº 37 del citado precepto.

La expropiación de bienes raíces fue incorporada en el aludido numerando por la Ley Nº 7.750, publicada en el "Diario Oficial" del 7 de Enero de 1944, por lo que hubo de pagar el impuesto a las compraventas, permutas y dación en pago de esa clase de bienes, hasta la promulgación de la Ley Nº 9.629, de 18 de Julio de 1950, cuyo artículo 53 introdujo el inciso segundo —que se mantiene hasta ahora—, mediante el cual se eximió del pago de ese impuesto en los casos de expropiación de inmuebles.

Durante la vigencia de la inclusión consultada en la Ley Nº

7.750, a que ya se ha hecho referencia, la expropiación de bienes raíces fue considerada por el Legislador, ostensiblemente, como uno de aquellos actos jurídicos que debían ser gravados con el impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, en consideración al conjunto de su ser, y, por lo tanto, de su incidencia económica y jurídica, sin que se la confundiera con las posibilidades gravadas en el Nº 151, relativo a los "recibos de dinero", ni en el Nº 188 concerniente a "todo documento que dé fe de un contrato o de un acto jurídico no gravado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 371".

En tales circunstancias, la pérdida de dicha calidad ad-hoc con respecto a la expropiación de bienes raíces, ha debido merecer un pronunciamiento claro y explícito de la ley reformativa si se ha pretendido innovar en la apreciación antes expuesta, toda vez que los motivos que movieron al legislador para estimarla como equivalente a la compraventa, permuta o dación en pago de bienes raíces, en cuanto a la tributación de que se trata, siguen en todo su vigor.

Aún más, en la expropiación

—a diferencia de lo que ocurre en los otros actos mencionados— hay una imposición de la potestad pública que priva a alguien de la propiedad de su dominio y se opera mediante el pago de una justa indemnización, por lo que el respectivo interesado ni provoca la gestión jurídica pertinente, ni obtiene lucro alguno en su provecho, razones ambas muy atendibles, que inclinan a la conclusión de que no procede a su respecto el gravamen tributario que se consagra en el N° 151 del referido artículo 7° de la Ley sobre Impuestos de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, relativo a los recibos de dinero.

El artículo 55 de la Ley N° 9.629 ya citada, en vez de omitir simplemente la mención de la expropiación de bienes raíces, en el tenor literal del N° 37 —silencio que habría podido interpretarse como una renovación de vigencia del Decreto Supremo N° 400, publicado en el "Diario Oficial" del 11 de Febrero de 1943, que regía con antelación a la Ley N° 7.750—, escogió la vía imperativa de la explícita exención de impuesto en referencia, actitud excepcional en el contexto del Decreto con Fuerza de Ley N° 371, que

no se aviene con el supuesto propósito de aplicar a la expropiación de bienes raíces, la contribución señalada en el N° 151, o en el N° 188 o en cualquiera otro del precitado artículo 7° de ese mismo Decreto con Fuerza de Ley.

Al establecer el fallo de segunda instancia en sus considerandos —confirmando lo resuelto en la sentencia del juez a quo—, que la afirmación del reclamante en el sentido de que procede aplicar a la expropiación de bienes raíces el N° 188 y no el N° 151 del artículo 7° del Decreto con Fuerza de Ley N° 371, tenía fundamento legal mientras se mantuvo el antiguo texto del N° 37 del mismo artículo, que aplicaba el impuesto de compraventa de bienes raíces a la expropiación, en cuyo caso no procedía gravar como recibido el precio, porque ella estaba contenida en el título de una obligación que había tributado; como también al sostener que la modificación del citado N° 37, en el sentido de que en los casos de expropiación de bienes raíces no se pagará este impuesto, significa que las expropiaciones han dejado de estar afectas al impuesto de compraventa de bienes

raíces, pero que ello mismo demuestra que automáticamente se ha hecho exigible, respecto de la declaración de haberse percibido el precio, el tributo que grava los recibos de dinero, ya que éste ha dejado de estar contenido en un título que ha pagado impuesto, ha incurrido, indudablemente, en un manifiesto error de derecho.

Si en la formalización del recurso de casación en el fondo, el recurrente ha dado como infringidos —entre otros preceptos— los N.ºs 151 y 188 del artículo 7º de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, pero acepta la tesis sustentada por el fallo de segunda instancia, en el sentido de que el N.º 37, tantas veces citado, solamente ha excluido a la expropiación de bienes raíces de entre los títulos que enuncia, sin otro alcance, y que en tal emergencia es forzoso dar cabida al N.º 188, en vez del N.º 151 en que se basa el fallo recurrido, porque le parece evidente que se está en presencia de un documento que da fe de un acto jurídico no gravado en dicha ley; resulta de manifiesto que ese recurso adolece del mismo error de derecho en que ha incurrido la sentencia atacada de

casación y llega, por tal motivo, a una conclusión también extraviada en la interpretación y aplicación de los textos legales que se han invocado al respecto —los N.ºs 37, 151 y 188 del artículo 7º—, con la consecuencia jurídica inevitable de que en la prioridad entre uno u otro de estos dos últimos tributos —supuesta la aceptación de la errada interpretación del N.º 37—, parece inconcuso que debe darse preferencia al del N.º 151, como lo hace la sentencia recurrida, toda vez que el documento que es base en la especie, contiene un recibo de dinero en una de sus estipulaciones esenciales.

Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema

Santiago, dos de Junio de mil novecientos sesenta y cuatro.

Vistos:

Don Raúl Cortés de Monroy Barrios solicitó, con fecha 24 de Noviembre de 1962, la devolución de la suma de Eº 1.195.39, que estima haber pagado indebidamente con ocasión del otorgamiento de la escritura de ex-

propiación que acompaña, por concepto del impuesto que señala el Nº 151 del artículo 7º del Decreto con Fuerza de Ley 371, de 1953; pidió a continuación que se aplique en la especie el impuesto del Nº 188 del mismo artículo, ascendente a E\$ 0,10. Sostiene, en síntesis, como fundamento de su petición, que en la Ley de Timbres no hay ningún número que grave específicamente la expropiación, por lo que debe aplicarse el impuesto del Nº 188 del artículo 7º.

El Director de Impuestos Internos, por resolución de 15 de Mayo de 1963, no dio lugar a lo solicitado por estimar que después de la modificación del Nº 37, en el sentido de "en los casos de expropiación de bienes raíces, no se pagará este impuesto", procede aplicar el Nº 151, que se refiere a los recibos de dinero, ya que éste ha dejado de estar contenido en un título que ha pagado el impuesto.

Apelada esta resolución, fue confirmada por la Corte de Apelaciones de La Serena en todas sus partes, según fallo de 5 de Septiembre de 1963, corriendo a fojas 18 vuelta.

La parte agraviada ha deducido y formalizado recurso de casación en el fondo y ha señalado como infringidos los N.ºs 151 y 188 del artículo 7º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 371, el artículo 10 Nº 10 de la Constitución Política del Estado y el artículo 2297 del Código Civil.

Se han traído los autos en relación.

Considerando:

Primero. Que el artículo 7º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 371, de 3 de Agosto de 1953, sobre Impuestos de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, contemplaba, y aún lo hace la legislación actual, algunos tributos aplicables a ciertos actos jurídicos, en atención al contenido integral de ellos, sustrayéndolos de este modo a la incorporación en otro u otros de los casos de su larga y compleja enumeración; en los cuales pudieran entenderse incluidos si se los discriminara en relación a las partes o elementos de ese mismo contenido general. Tal ha ocurrido, por ejemplo, con lo dispuesto por el Nº 37 del precepto citado, al ordenar lo que sigue: "Com-

praventas, permutas y dación en pago de bienes raíces, 8,4%";

Segundo. Que la expropiación de bienes raíces fue incorporada en dicho numerando por la Ley Nº 7750 publicada en el "Diario Oficial" de 7 de Enero de 1944, por lo que hubo de pagar el impuesto correspondiente a las compraventas, etc., hasta la promulgación de la Ley Nº 9629, de 18 de Julio de 1950, cuyo artículo 55 introdujo el inciso segundo siguiente que se mantiene hasta ahora: "En los casos de expropiación de bienes raíces, no se pagará este impuesto";

Tercero. Que durante la vigencia de la inclusión consultada en la Ley Nº 7750, a que se refiere el fundamento anterior, la expropiación de bienes raíces fue considerada por el Legislador, ostensiblemente, como uno de aquellos actos jurídicos que debían ser gravados con el Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, en consideración al conjunto de su ser, y, por lo tanto, de su incidencia económica y jurídica, sin que se la confundiera con las posibilidades gravadas en el Nº 151, relativo a "recibos de di-

nero" ni en el Nº 188 concerniente a "todo documento que dé fe de un contrato o de un acto jurídico no gravado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 371";

Cuarto. Que en tales circunstancias, la pérdida de dicha calidad ad-hoc con respecto a la expropiación de bienes raíces, ha debido merecer un pronunciamiento claro y explícito de la ley reformatoria si se ha pretendido innovar en la apreciación antes expuesta, toda vez que los motivos que movieron al legislador para estimarla como equivalente a la compraventa, permuta, dación en pago de bienes raíces, etc., en cuanto a la tributación de que se trata, siguen en todo su vigor. Aún más, en la expropiación, a diferencia de lo que ocurre en los otros actos mencionados, hay una imposición de la potestad pública que priva a alguien de la propiedad de su dominio y se opera mediante el pago de una justa indemnización, por lo que el respectivo interesado ni provoca la gestión jurídica pertinente ni obtiene lucro alguno en su provecho, razones ambas muy atendibles, que inclinan a la conclusión de que no procede el gravamen tri-

RECLAMACION DE IMPUESTO

107

butario que se discute en autos;

Quinto. Que con tales antecedentes, el artículo 55 de la Ley Nº 9629, como ya se ha expresado antes, en vez de omitir simplemente la mención de la expropiación de "bienes raíces en el tenor literal del Nº 37, silencio que habría podido interpretarse como una renovación de vigencia del Decreto Supremo Nº 400, publicado en el "Diario Oficial" de 11 de Febrero de 1943, que regía con antelación a la Ley Nº 7750, escogió la vía imperativa de la explícita exención de impuesto en referencia, actitud excepcional en el contexto del Decreto con Fuerza de Ley Nº 371, que no se aviene con el supuesto propósito de aplicar a la expropiación de bienes raíces la contribución señalada en el Nº 151, o en el Nº 188, o en cualquier otro;

Sexto. Que la sentencia de segunda instancia, confirmando la de primera, expresa en los considerandos 3º y 4º: "que la afirmación del ocurrente (se refiere a la pretensión del reclamante en el sentido de que procede la aplicación del Nº 188 en vez del Nº 151), te-

nía fundamento legal mientras se mantuvo el antiguo texto del Nº 37 del artículo 7º de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, que aplicaba el impuesto de compraventa de bienes raíces a la expropiación, en cuyo caso no procedía gravar como recibido el precio, porque ella estaba contenida en el título de una obligación que había tributado", y "que la modificación del citado Nº 37, en el sentido de que en los casos de expropiación de bienes raíces, no se pagará este impuesto", significa que las expropiaciones han dejado de estar afectas al impuesto de compraventa de bienes raíces, pero, ello mismo demuestra que automáticamente se ha hecho exigible respecto de la declaración de haberse percibido el precio, el tributo que grava los recibos de dinero, ya que éste ha dejado de estar contenido en un título que ha pagado impuesto";

Séptimo. Que, como se ve, la sentencia corriente a fojas 10, ha incurrido en un manifiesto error de derecho al interpretar el Nº 37 de la Ley de Timbres y ha dado cabida en la especie, por eso, a la aplicación del Nº 151, relativo a recibos de dinero;

Octavo. Que la formalización del recurso de casación en el fondo, corriente a fojas 22, ha dado como infringidos, entre otros preceptos, los Nos. 151 y 188 de la Ley en examen, pero acepta la tesis sustentada por el fallo de segunda instancia en el sentido de que el Nº 37, tantas veces citado, solamente ha excluido a la expropiación de bienes raíces de entre los títulos que enuncia, sin otro alcance, y que en tal emergencia es forzoso dar cabida al Nº 188, en vez del 151, en que se basa el fallo recurrido, porque le parece evidente que se está en presencia de "un documento que da fe de un acto jurídico no gravado en la presente ley";

Noveno. Que planteados así los prolegómenos que anteceden, aparece de manifiesto que el presente recurso adolece del mismo error de derecho en que ha incurrido la sentencia atacada de casación y llega, por tal motivo, a una conclusión también extraviada en la interpretación y aplicación de los textos legales que se han invocado al respecto, esto es, los Nos. 37, 151 y 188 antes analizados; con la consecuencia jurídica inevitable de que en la prioridad entre uno u otro de

estos dos últimos tributos, su- puesta la aceptación de la erra- da interpretación del Nº 37 que rebate esta sentencia, parece inconcuso que debe darse pre- ferencia al del Nº 151, como lo hace la sentencia recurrida, to- da vez que el documento que es base en este juicio contiene un recibo de dinero en una de sus estipulaciones esenciales;

Décimo. Que también estima vulnerado, este recurso de ca- sación en el fondo, el inciso 2º del Nº 10 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado y el artículo 2297 del Código Ci- vil, infracciones que, de haberse cometido, pierden toda eficacia a la luz de los razonamientos que se han dilucidado en el cur- so de esta sentencia.

Por estos fundamentos y vis- to, además, lo dispuesto en los artículos 765, 766, 767, 787 y 802 del Código de Procedimiento Civil, se declara sin lugar el re- curso de casación en el fondo interpuesto en representación de don Raúl Cortés de Monroy Barrios, contra la sentencia de fecha 5 de Septiembre de 1963, escrita a fojas 18 vuelta, expedi- da por la Corte de Apelaciones de La Serena, con costas, en que se condena solidariamente

RECLAMACION DE IMPUESTO

109

a dicho litigante y al abogado que aceptó su patrocinio.

Aplicase a beneficio fiscal la cantidad de E° 11,95, consignada según comprobante de ingreso N° 3337, de fecha 17 de Septiembre de 1963, que se registra a fojas 20.

Transcríbase a la Contraloría General de la República, a la Tesorería Provincial de La Serena y al respectivo Colegio de Abogados.

VOTO DISIDENTES.— Acordada con el voto en contra del abogado integrante don Leopoldo Ortega Noriega, quien estuvo por acoger el recurso con el mérito de los razonamientos formulados en los siete primeros considerandos del presente fallo.

Redacción del abogado inte-

grante don Rafael Correa Fuenzalida.

Anótese, devuélvanse y publíquese.

Agréguese el impuesto.

Manuel Montero M. — Ramiro Méndez B. — Enrique Urrutia M. — Eduardo Ortiz S. — Israel Bórquez M. — Leopoldo Ortega N. — Rafael Correa F.

Dictada por los señores Ministros titulares de la Excelentísima Corte, don Manuel Montero Moreno, don Ramiro Méndez Brañas, don Enrique Urrutia Manzano, don Eduardo Ortiz Sandoval y don Israel Bórquez Montero, y Abogados integrantes don Leopoldo Ortega Noriega y don Rafael Correa Fuenzalida. — Aníbal Muñoz Arán, Secretario.